



Next Generation Democracy

Foro sobre Democracia de Nueva Generación para las Américas

Bogotá, Colombia • 24-26 Agosto 2015

RESUMEN DE LOS DEBATES

El objetivo de los Foros Regionales sobre Democracia de Nueva Generación es identificar los elementos y propuestas que conformarán las Agendas Regionales NGD. Las Agendas se elaborarán sobre la base de: a) los informes regionales NGD que han sido preparados por el equipo del Bertelsmann Transformation Index y completados por los socios regionales del proyecto (www.nextgenerationdemocracy.org); b) las contribuciones de expertos y actores regionales; y c) la experiencia política de los Miembros del CdM de la región.

Este documento de conclusiones del Foro sobre Democracia de Nueva Generación para las Américas constituye, por tanto, un “paso intermedio” hacia la elaboración de la Agenda Regional. Todos los participantes en el Foro podrán contribuir a la redacción de la Agenda a partir de un borrador que se preparará, en paralelo con los borradores de las demás agendas regionales, durante los próximos meses¹.

DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

América Latina afronta un período muy difícil en términos económicos, que se prevé largo, y que puede sin duda agravar los problemas sociales y también políticos que el subcontinente no logró resolver durante la pasada década de bonanza económica. Aunque la región apenas resultó afectada por la crisis económica y financiera global que

¹ En el caso particular de Las Américas, la Agenda Regional incorporará los resultados del Foro de Santo Domingo, organizado por IDEA Internacional, FUNGLODE y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (vid. el documento final Constataciones y Recomendaciones del III Foro Internacional de Santo Domingo http://www.idea.int/americas/upload/Declaracion_Fi.pdf).

se inició en 2008, no es desde luego inmune –y basta referirse a los precios de las materias primas o a su dependencia de China- a los embates de la globalización económica. La pregunta *por qué no se hizo cuando era posible*, aunque tiene cierto carácter retórico, puede servir como revulsivo para destacar que las reformas estructurales, en particular las relativas a lograr mayor equidad, siguen pendientes en América Latina, y que no pueden posponerse pese al contexto de dificultad.

Debe reconocerse, en todo caso, que la situación actual en la región es mucho mejor que la de los años 80, y que se han logrado avances extraordinarios durante el presente siglo en ámbitos tales como la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hoy, sin embargo, no solo se trata de consolidar esos logros, sino de mantener el esfuerzo para que América Latina deje por fin de ser la región más desigual del planeta. Se trata, por lo demás, de una región muy heterogénea, y cada sub-región y cada país presenta desafíos y oportunidades específicos, además de aquellos que son comunes al mundo globalizado. La urgente necesidad de adoptar políticas medioambientales es un reto añadido que tiene particular incidencia en América Latina, teniendo en cuenta la dependencia económica que la mayoría de países tiene respecto de materias primas y recursos no renovables.

La integración regional y la “construcción de ciudadanía” son dos grandes tareas pendientes que podrían contribuir a dar respuesta a algunos de los retos existentes en la región. En cuanto a lo primero, la superposición de iniciativas de cooperación, y el hecho de que en algún caso tengan un marcado carácter ideológico, en realidad impide que los esfuerzos se traduzcan en mejoras sustanciales de la calidad de vida de los ciudadanos latinoamericanos.

La cultura ciudadana y la educación cívica requieren políticas de medio plazo que comiencen en la escuela, pero la tendencia es hacia una creciente individualización del ciudadano, que –según los últimos datos del Latinobarómetro- percibe su situación personal como el producto de su propio esfuerzo, con independencia de la acción del Estado. Las crecientes exigencias de los ciudadanos muy difícilmente pueden ser satisfechas, por lo demás, en períodos de debilidad económica prolongada. El diagnóstico general sobre la situación de la democracia latinoamericana es, por tanto, preocupante: la incapacidad de las instituciones democráticas de dar respuesta a los problemas y a las expectativas crecientes de los ciudadanos puede suponer el debilitamiento progresivo de la democracia, algunos de cuyos síntomas son ya manifiestos.

Las principales preocupaciones y propuestas expresadas por los participantes durante las sesiones plenarias del Foro pueden resumirse y sistematizarse del siguiente modo:

1. En el plano social y político, América Latina no es ajena a la tendencia global que ha favorecido el surgimiento de un “nuevo ciudadano” interconectado, con mayor formación, y desde luego más exigente. Una buena parte de las exigencias y expectativas de las nuevas clases medias, dependen hoy, sin embargo, de la evolución de la economía. Por un lado, la mayoría de los analistas consideran que sólo a partir de un crecimiento económico significativo –que suele cifrarse en el 5 ó 6%- puede reducirse la desigualdad en América Latina. Por otro lado, si el crecimiento económico existente, sea cual sea, no conduce a la reducción apreciable de la desigualdad, es previsible el aumento de la desafección política y

la indiferencia general hacia la democracia, y por tanto de la tensión social. El principal desafío de América Latina durante los próximos años es por tanto mantener los logros sociales y seguir reduciendo la desigualdad a pesar de la ralentización del crecimiento.

2. Entre los problemas directamente relacionados con la calidad de la democracia, América Latina tiene que lograr evitar o al menos mitigar las consecuencias negativas del presidencialismo, *inter alia* revirtiendo la tendencia a ampliar las posibilidades de re-elección presidencial. La situación es especialmente grave si a ello se añade el cuasi-monopolio de la información que en ciertos países ejercen el Estado y los grupos de poder, y la cuestión de la financiación de las campañas políticas. El funcionamiento del sistema de partidos (que sólo en algunos países, como Uruguay o Chile, puede considerarse adecuado) debe prevalecer sobre el personalismo de los candidatos presidenciales y presidentes en busca de la re-elección. Cuando el destino de un país aparece asociado a una sola figura política, la frustración de expectativas del ciudadano tiende a ser rápida y brusca, y ello afecta al funcionamiento de la propia democracia.
3. América Latina sigue teniendo, además, problemas bien conocidos relativos a la separación de poderes, en ocasiones debido a la 'captura del Estado' por las élites políticas y económicas. La fragilidad del Estado de derecho no ha logrado en general superarse en la región, de modo que el ciudadano no obtiene la debida protección cuando sus derechos son violados por el Estado o por otros particulares. Se aprecia, además, un debilitamiento general de la presencia de la sociedad civil en la acción pública, que en muchos países está además vinculada al poder político; y sigue aumentando el poder y la influencia de los actores económicos privados en la vida social y política, si bien en defensa de intereses particulares.
4. La protesta ciudadana ante los problemas enumerados es hoy frecuente y a veces masiva en América Latina; y ello constituye un síntoma de salud democrática a pesar de que esos reclamos generalmente no se traducen en reformas políticas. El problema es que la prolongada ausencia de reformas podría acabar deslegitimando la democracia. No es fácil determinar, no obstante, si esas demandas en realidad implican reformas estructurales; o a qué estarían dispuestos a renunciar los ciudadanos, colectivamente, para satisfacer nuevas reivindicaciones. En particular, las protestas generalizadas relativas a la mejora de las condiciones económicas podrían poner de manifiesto las dificultades de la democracia para regular la economía de mercado. Ahora bien, aunque la protesta masiva muestra los límites de la democracia representativa, solo la democracia representativa (reformada si es preciso) puede canalizar y dotar de sentido al contenido de la protesta, y eventualmente ofrecer una respuesta legítima que tenga en cuenta los intereses generales.
5. El alcance de las propuestas de reforma para hacer frente a los síntomas de debilidad de la democracia depende, en realidad, de la concepción sobre el alcance y contenido de la democracia. Algunas propuestas de reforma discutidas durante el Foro pueden considerarse minimalistas, centradas por ejemplo en la mejora de mecanismos parlamentarios, mientras que otras llegan a poner en cuestión el sistema de representación en su conjunto. No hay sin embargo

discrepancias respecto de la exigencia de transparencia –comenzando por la financiación de campañas electorales- y efectiva rendición de cuentas (accountability) como requisitos imprescindibles para que el ciudadano comience a recuperar la confianza perdida en las instituciones democráticas. El acceso a información veraz, junto a la libertad de expresión, es el fundamento de la participación. Los niveles sub-nacionales, comenzando por el nivel local, han de someterse a criterios igualmente estrictos en este sentido.

6. Además, durante los próximos años, las tensiones derivadas de la lucha por los recursos naturales, comenzando por el agua limpia y por el territorio, se agravarán como consecuencia del cambio climático. Añadiendo este aspecto al contexto que se a descrito a grandes rasgos, algunos analistas anticipan una ‘tormenta perfecta’ que afectará gravemente a la calidad de la democracia en la región, por supuesto con diferencias importantes entre países –la situación de Centroamérica es especialmente preocupante. Los gobiernos y las instituciones han de ser capaces de promover grandes consensos nacionales –en este sentido, el proceso de paz en Colombia es un ejemplo muy significativo- sobre prioridades que a medio plazo beneficien al país en su conjunto. Es necesario que los gobiernos sepan explicar la necesidad de emprender reformas a los ciudadanos, pero sobre todo es necesario que mantengan un diálogo permanente al respecto con los ciudadanos, los grupos sociales y los agentes económicos. La fiscalidad justa y progresiva, el acceso de los sectores informales a la educación y a la formación de calidad, o cuestiones que no forman parte del debate latinoamericano como la función social de la propiedad privada o la responsabilidad de los actores económicos en la sostenibilidad y en el bienestar social, son menos tal vez fáciles de lograr pero mucho más acuciantes en épocas de escasez.

Las propuestas de acción y las buenas prácticas democráticas discutidas en cada uno de los tres Grupos de Trabajo pueden resumirse del siguiente modo:

GRUPO DE TRABAJO I - NUEVOS VALORES DEMOCRATICOS Y REFORMAS INSTITUCIONALES

Como primera salvedad, cabe afirmar que los países que aún carecen de garantías democráticas mínimas en términos de libertad de expresión y libertad de asociación política, o que las han derogado, carecen también de la capacidad de revitalizar y ampliar valores democráticos o poner en práctica la gran mayoría de las reformas necesarias para adaptar la democracia a los desafíos del futuro. En segundo lugar, es preciso recordar que un nivel mínimo de seguridad ciudadana es imprescindible para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y disfruten de la democracia –además de que los intentos de imponer la seguridad por cauces no democráticos suponen una amenaza añadida a la democracia. También respecto de la seguridad ciudadana debe realizarse un catálogo de buenas prácticas, basado sobre todo en experiencias locales exitosas, que pueda ser incorporado a la Agenda Regional de Democracia de Nueva Generación.

La incorporación de nuevos valores democráticos a los marcos constitucionales debería ser un proceso relativamente flexible, que podría comenzar –tal como propusieron

algunos participantes- por dotar de mayor flexibilidad a las propias constituciones. El debate abordó las siguientes cuestiones:

A) Participación y *democracia horizontal* como valor y como procedimiento

Sólo la participación ciudadana y en particular de los ciudadanos más jóvenes puede revitalizar las instituciones democráticas, cada vez más denostadas por la opinión pública. En este sentido, la preservación del núcleo de la democracia representativa puede requerir, a juicio de muchos participantes, una vuelta a las raíces de la democracia como sistema de decisión comunitaria, incluida la consulta directa a los ciudadanos. Algunos países -como es el caso del Reino Unido, a través de grandes comisiones que realizan consultas a la población- están tratando de aprovechar en este sentido las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación,² y existen también buenos ejemplos en algunos países de América Latina que deben servir de inspiración para los demás países de la región.

Las mejores experiencias de gobierno consultivo, incluyendo en particular la participación en el diseño y ejecución de políticas públicas y el presupuesto participativo, deben ser compiladas, analizadas e incorporadas a una Agenda de Democracia de Nueva Generación. En el plano de la democracia representativa, se propuso realizar, en paralelo, una revisión de la institución del voto obligatorio, de modo que la participación tenga un carácter genuino; y tomar en consideración el establecimiento de sistemas de cuotas respecto por ejemplo de las mujeres o pueblos indígenas.

B) Hacia un nuevo contrato social

Teniendo en cuenta las discusiones de la sesión plenaria, todo indica que ha llegado el momento de renovar el contrato social subyacente al funcionamiento de la democracia en las Américas, de modo que el sector privado en su conjunto, así como la sociedad civil, entre a formar parte integrante del pacto constitucional. La mayor o menor formalización de este proceso corresponde a cada país, pero es preciso establecer y encauzar -más allá de intereses específicos- el diálogo entre la economía y la política para fortalecer la confianza en las instituciones del propio país y solventar los problemas socio-económicos que puedan afectar al funcionamiento de la democracia.

C) Instituciones y mecanismos administrativos y judiciales de control y sanción

La erradicación de la corrupción y de otros males de la democracia pasa por el fin de la impunidad y por el reforzamiento del control político y judicial de la acción de gobierno y de la relación entre los sectores público y privado. Aunque la sensibilidad ética es distinta en cada país, la ciudadanía solo recuperará la confianza en las instituciones democráticas a partir del momento en que compruebe que los sistemas de control funcionan y las sanciones y penas son efectivamente impuestas. En este sentido, la recuperación de la confianza en los

² Vid, por ejemplo, <http://www.parliament.uk/business/commons/the-speaker/speakers-commission-on-digital-democracy/>.

partidos políticos podría pasar por la adopción de normas que definan su responsabilidad civil e incluso penal.

El papel central del poder judicial en el fin de la corrupción desde luego requiere su efectiva independencia –comenzando por el sistema de nombramientos- y la mejora de su capacidad, lo que a su vez requiere mayor énfasis en la formación de los jueces y fiscales, así como del personal administrativo y policial de apoyo. Colombia ha creado recientemente una Universidad dedicada precisamente a mejorar la eficacia del poder judicial y en particular de la Fiscalía. El fortalecimiento del aparato administrativo de control es igualmente imprescindible, comenzando por las contralorías. La profesionalización de las administraciones públicas ha logrado avances sustanciales en Chile y Brasil, con componentes específicos de educación a distancia así como de apoyo a los mecanismos sociales de control. Las reformas tienen que extenderse a todos los niveles, comenzando por el nivel local.

D) Sistema de partidos políticos y garantías del sistema electoral

En aquellos sistemas donde no existen trabas fundamentales a la asociación política y el ejercicio de la labor de oposición, la transparencia y la rendición de cuentas pueden y deben incorporarse plenamente al funcionamiento interno de los partidos. La democracia interna de los partidos es la antesala de la participación ciudadana en sistema político, y puede contribuir a mitigar el presidencialismo en la medida en que permita el debate sobre las ideas. En cuanto a la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, el catálogo de buenas prácticas propuesto por IDEA Internacional en su manual y su reciente resumen de recomendaciones para prevenir y evitar la corrupción política se incorporarán a las Agendas Regionales del Proyecto Democracia de Nueva Generación³. En el caso particular de las Américas, los debates han puesto de manifiesto la preferencia por el financiamiento público de las campañas y del funcionamiento de los partidos políticos, la limitación de la opacidad de cualquier financiación privada, el carácter independiente permanente de las juntas electorales, la veeduría internacional, o el acceso regulado y equitativo de los partidos a los medios de comunicación.

GRUPO DE TRABAJO II: AVANCES HACIA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

El grupo de trabajo II inició sus deliberaciones con referencias directas al papel de los partidos políticos en la democracia. Los partidos políticos han encauzado tradicionalmente las relaciones entre los ciudadanos y los gobiernos, y en gran medida deberían representar la continuidad de las políticas, puesto que son depositarios de propuestas acordes con su respectiva ideología, mientras que los gobiernos son

³ Vid. el Manual en <http://www.idea.int/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns/index.cfm> y el correspondiente Policy Brief en <http://www.idea.int/resources/analysis/upload/PB-Money-in-Politics.pdf>.

transitorios. Sin embargo, el declive de los partidos es manifiesto también en este ámbito, en la medida en que no lideran ya debates de actualidad política relacionados con el medio ambiente, las migraciones, la lucha contra la droga o las políticas de igualdad.

En el marco de este debate inicial surgió la propuesta concreta de organizar una reunión en el marco del Club de Madrid sobre el papel y el funcionamiento real de los partidos políticos en las Américas, que permita también comparar experiencias disímiles en distintas sub-regiones.

Por lo que respecta al tema central de debate en este grupo, es pertinente afirmar que, desde el punto de vista económico y social, tal vez el principal problema en América Latina sea la persistencia de un amplísimo sector informal, formado por grupos heterogéneos que tienen en común la carencia efectiva de derechos. Puesto que esos sectores están en gran medida excluidos también de la participación política, ese problema afecta, en definitiva, al núcleo de la democracia.

Las dos posiciones básicas sobre el modo de resolver la desigualdad y la exclusión fueron expresadas durante los debates en el grupo de trabajo. Por un lado, el comercio puede considerarse una gran palanca para generar igualdad, que redundará además en una mayor democratización; por otro lado, puede considerarse que la disminución de la desigualdad pasa por la regulación del mercado, y requiere de políticas estatales decisivas. La cuestión de fondo de algún modo está resuelta en América Latina: se necesita 'más Estado' y 'más mercado'. Las discrepancias siguen residiendo en el grado de intervención del Estado sobre el mercado, y en el peso relativo que ha de tener la acción pública en la redistribución.

La vulnerabilidad de los grupos excluidos se ha paliado en muchos países latinoamericanos durante la última década a través de la acción pública, mediante programas que han logrado sacar de la pobreza a millones de personas. Las dificultades de seguir avanzando en este sentido y acabar con la informalidad y la exclusión son notorias en el presente contexto económico, en el que están produciéndose retrocesos en ciertas políticas asistenciales. Los sectores informales tienen, ciertamente, menor capacidad de ejercer presión sobre los gobiernos que las clases medias, y por ello es difícil lograr un cambio de prioridades que favorezca el aumento del esfuerzo a favor de los sectores excluidos. Tales esfuerzos habrían además de emprenderse en un período de crecimiento débil y teniendo en cuenta que muy pocos países –Chile es una excepción– aprovecharon la bonanza para acometer reformas, o tienen –como en el caso de Brasil– reservas que les permiten un cierto margen de maniobra. En todo caso, el paradigma del crecimiento económico infinito ha concluido; y es necesario, aunque de momento no hay propuestas claras, hacer compatible un crecimiento bajo o nulo con la puesta en marcha de políticas redistributivas.

En este contexto, el grupo de trabajo discutió distintas medidas transformadoras para la generación de igualdad y equidad, así como su relación con las políticas de empleo y en particular con la educación, que puede considerarse una "política pre-redistributiva" y desde luego contribuye directamente a la creación de clases medias. Entre las medidas propuestas, respecto de las cuales es preciso identificar buenas prácticas en distintos países de la región –y en particular de Uruguay– para su inclusión en la Agenda de Democracia de Nueva Generación para las Américas, cabe destacar:

- reformas fiscales que permitan aumentar los recursos existentes para mejorar las condiciones de los sectores excluidos y de los sectores medios en cada país;
- políticas territoriales que permitan equilibrar el crecimiento entre las distintas zonas de un país, evitando en particular que ciertas zonas permanezcan relegadas; y
- aumento de los recursos destinados a los sectores estratégicos de la educación y la tecnología, teniendo presente el objetivo mencionado de lograr progresivamente el equilibrio territorial.

La puesta en marcha de estas políticas corre peligro si se hace depender del crecimiento económico, pero tal vez el único modo de dinamizar la economía nacional en el presente contexto global sea la incorporación de nuevas clases medias, convenientemente formadas, al sistema productivo. Es fundamental, por tanto, establecer planes de acción estatales a largo plazo, que contemplen las consecuencias de la falta de políticas eficaces contra la exclusión.

GRUPO DE TRABAJO III: NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEMOCRÁTICAS Y EFICACES

Las políticas públicas que incorporen valores acordes a las aspiraciones de una democracia de nueva generación han de ser, en primera instancia, eficaces para atender las demandas sociales existentes en América Latina. Para conseguirlo, es necesario vencer los obstáculos que en la región siguen impidiendo la formulación de y ejecución de políticas públicas adecuadas; entre ellos:

- la débil legitimación de las mismas, ante la escasa o nula participación ciudadana;
- la corrupción y el clientelismo político ante la falta de transparencia, rendición de cuentas y débiles mecanismos de control y sanción;
- la poca sostenibilidad de las mismas, ante la carencia de recursos por estructuras tributarias débiles y mal financiadas;
- el limitado impacto de las mismas, ante la falta de rigor en su diseño y ejecución y ante la ausencia de mecanismos de medición de impacto; y
- la necesidad del fortalecimiento del capital humano y capacidades de la función pública.

Frente estas preocupaciones, es preciso impulsar las siguientes acciones en el marco de la Agenda de Democracia de Nueva Generación para las Américas, de modo que se produzcan avances significativos hacia el diseño y la ejecución de políticas públicas más democráticas y más eficaces:

A) Incorporación de las tecnologías digitales

Las tecnologías digitales pueden garantizar el acceso efectivo a la información por parte de los ciudadanos y por tanto una mayor transparencia en la administración pública. Los distintos modelos de 'gobierno digital' se han mostrado además muy eficaces para combatir los márgenes de discrecionalidad de burócratas y políticos y constituyen por tanto un instrumento esencial para luchar contra la corrupción administrativa, pero deben ser sobre todo eficaces para diseñar políticas ajustadas a las necesidades y dirigir la acción pública allí donde sea necesaria. Al mismo tiempo, es necesario evitar que los gobiernos autoritarios, pero también en algunos casos los considerados democráticos,

utilicen las tecnologías de la comunicación para controlar o reprimir a la oposición o para limitar derechos individuales mediante vagas apelaciones a la seguridad.

América Latina ha avanzado rápidamente en este sentido, e incluso puede considerarse una región pionera. Algunos países han implantado con éxito modelos de 'gobierno digital', tales como el Sistema Electrónico de Compras Públicas en Chile, el Registro Unificado de Beneficiarios de Ayudas Sociales de Costa Rica, o los mecanismos de acceso a la información pública en instituciones del Estado en México.

B) Fortalecimiento de la perspectiva territorial

El impacto de las políticas públicas en América Latina con frecuencia se ha limitado a los principales centros poblacionales de los respectivos países. Los vacíos de presencia estatal en muchas regiones han dado pie al fortalecimiento de poderes fácticos, entre ellos los grupos de crimen organizado y el narcotráfico. Algunos países latinoamericanos en realidad tienen, según la OCDE, 'pre-administraciones públicas' que son incapaces de poner en marcha reformas que tengan impacto positivo en la vida de los ciudadanos.

El diseño de políticas públicas basadas en las realidades de cada región y diseñadas y ejecutadas de la mano de los gobiernos locales favorece el fortalecimiento institucional y desarrollo nacional más equilibrado. Las políticas públicas han de cumplir, en este sentido, una función redistributiva. Para ello, es recomendable la adopción de una Ley nacional que establezca el marco general para el desarrollo de dichas políticas públicas de alcance territorial, que a su vez tenga en cuenta a las poblaciones o sectores de población en situación de vulnerabilidad, tales como las poblaciones originarias indígenas o las mujeres.

Pese a la inexistencia de ejemplos integrales de desarrollo equilibrado del territorio nacional mediante la puesta en práctica de políticas públicas, cabe citar algunas referencias valiosas, como los programas destinados a construir políticas públicas territoriales que han sido financiados en distintos países por organismos internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el CAF; respecto del segundo, cabe citar el apoyo prestado a la aplicación del Plan Maestro para el Desarrollo Integral y Sostenible del Distrito en la región de Barú, que pertenece a la provincia panameña occidental de Chiriquí.

C) Construcción de más ciudadanía

Los valores reafirmados de una democracia de nueva generación deben tener una traducción directa en políticas públicas. América Latina debe apostar a un *republicanismo cívico*, que en particular supone la construcción de institucionalidad a partir del fortalecimiento de la cultura ciudadana y de la educación cívica. Las políticas públicas han de favorecer y a su vez apoyarse en una actitud cada vez más tolerante, más respetuosa y más responsable, que sea acorde con sociedades solidarias y deliberantes. En el fondo, se trata de construir, reconstruir o fortalecer las relaciones sociales y el espacio público para crear las condiciones que a su vez garanticen el éxito de las políticas que se promocionan.

El grupo de trabajo identificó programas educativos específicamente dirigidos a la formación cívica en varios países de la región. Entre los programas más exitosos, cabe citar el caso de Costa Rica, que ha logrado crear y consolidar una conciencia ambiental en niños y jóvenes a través de la escuela; y esa conciencia se ha trasladado con el

tiempo, de modo natural, al conjunto de la sociedad. Es preciso, no obstante, identificar buenas prácticas sobre la construcción de ciudadanía en las Américas en ámbitos distintos a la educación formal.

.....

Los organizadores del Foro y los socios del Proyecto Democracia de Nueva Generación se comprometen a incluir estas ideas en el borrador de Agenda de Democracia de Nueva generación para las Américas, y a seguir trabajando sobre las buenas prácticas identificadas y otras que puedan añadirse.

Tal como se afirmó en la reunión de Florencia que dio inicio al Proyecto Democracia de Nueva Generación, en octubre de 2014, la Agenda regional ha de servir en el caso de las Américas como una plataforma para discutir cuestiones esenciales relacionadas con la integración regional y la revisión de las relaciones entre el Norte y el Sur del continente. La democracia debe ocupar el lugar central del debate regional y puede servir para facilitar el acercamiento entre países sobre bases nuevas, reforzando en particular el papel de la Organización de Estados Americanos y de las demás organizaciones regionales y sub-regionales. El aprendizaje mutuo entre los países y los actores de la región, que después tenga incidencia en las reformas nacionales, es la manera más segura de lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones democráticas y de que no se produzcan retrocesos en los procesos de democratización.